



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

Medellín, enero veintisiete (27) de dos mil veintiuno (2021)

Radicado: 05001-31-05-**019-2015-01537-01**  
Demandante: HERMES ALBERTO RONDÓN DÍAZ  
Demandados: MAURO VÉLEZ GÓMEZ – CURVA CONSTRUCCIÓN  
URBANISMO VÍAS & ARQUITECTURA LTDA.  
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA  
Tema: CONTRATO DE TRABAJO

La sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral promovido por **HERMES ALBERTO RONDÓN DÍAZ** en contra de **COLPENSIONES**.

Decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

### ANTECEDENTES

La A quo, tras encontrar satisfechos los elementos integrantes del contrato de trabajo, declaró la existencia de una relación laboral entre el demandante y los demandados entre el 1 octubre de 2014 hasta el 10 de marzo de 2015; condenó a los demandados al pago de auxilio de cesantías por \$622.222, intereses a las cesantías por \$33.181,

prima de servicios \$622.222, vacaciones compensadas \$311.106, salarios insolutos \$1'166.6566, indemnización por despido injusto por \$1'400.000 y costas en cuantía equivalente al 15 % de las condenas.

Esta determinación fue apelada por el apoderado de la parte demandante, quien solicita sea reconocida la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al igual que la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cuanto la pasiva era consciente del contrato de trabajo sostenido con el actor, por lo que el retardo en el pago de sus obligaciones para con éste implicaron mala fe de su parte. Sumado a ello, los demandados contaban con la capacidad económica y el personal idóneo para determinar que estaban en la obligación de cancelar al demandante prestaciones.

A su vez, la pasiva presentó oposición a las condenas impuestas, solicitando que las mismas sean revocadas, por cuanto de los testimonios escuchados no puede concluirse que el demandante ostentaba la calidad de contratista al igual que la de trabajador, siendo la primera de ellas la única relación existente entre las partes.

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la pasiva señala que la relación entre el demandante y los demandados era la que correspondía a un contratista independiente, en donde el contratante no le suministra ni herramienta ni elementos de protección personal, siendo el contratista quien debía contar con ellas para la ejecución del contrato, incluso, las que el propio del demandante debía usar. Afirma que de los testimonios puede verse que no existió una subordinación del demandado, sino que se trató de un verdadero contratista independiente y que su labor como maestro de obra surgió como una actividad adicional al contrato de obra civil que suscribió inicialmente, y que, en la práctica, no podía ejecutarse sin la labor de un maestro de obra, porque era quien debía darle las instrucciones a la cuadrilla de trabajadores y tener la coordinación con el resto de personal de la obra.

## CONSIDERACIONES

De forma preliminar, encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que entre el demandante y consorcio Antioquia 2014, el cual se encuentra conformado por los demandados, se suscribió su contrato de obra con el objeto de ejecutar “primera etapa para la construcción y ejecución de obras para la institución educativa presbítero Eduardo Zuluaga del Municipio de Yolombó Vereda el Rubí, en el marco del contrato interadministrativo N° 2012SS150114”, el cual se ejecutó entre el 16 de septiembre re de 2014 y el 10 de marzo de 2015 (fls. 43 – 69 y respuesta a hecho 5 de la demanda).

En este orden de ideas, en virtud del principio de consonancia, le corresponde a esta Corporación determinar **1)** Si hay lugar o no a la declaratoria de una relación laboral entre las partes procesales desde el 16 de septiembre re de 2014 y el 10 de marzo de 2015 **2)** si hay lugar a ordenar los pagos correspondientes la liquidación de las prestaciones sociales, salarios insolutos, indemnización por despido injusto y la procedencia de las sanciones de que tratan los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990.

Pues bien, como es sabido el contrato de trabajo no existe en el acuerdo abstracto de voluntades sino en la materialización de la prestación del servicio, por ende, esto último y no el acuerdo verbal o escrito, es lo que determina su existencia (Art 53 CP). Así, en el artículo 23 del CST, se señalan como elementos de este tipo de contratos: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario.

Ahora bien, según el artículo 24 del mismo estatuto, debe presumirse que *toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo*. Por lo tanto, si en un proceso se establece que se dio una prestación personal de servicios remunerada y se desconoce si fue subordinada o no, o subsiste duda a este propósito, deberá el respectivo juez concluir que la relación estuvo regida por un contrato de trabajo con las consecuencias jurídicas que ello pueda aparejar. Ello no significa, como lo ha dicho el órgano de cierre “...que tal presunción haya pretendido abolir las relaciones laborales

*independientes, ni en modo alguno las descartó...*, pues al contrario supone que el concepto de relación de trabajo es un género que contiene especies diversas entre las cuales, fuera de la modalidad subordinada, se hallan las prestaciones de servicios que en modo independiente y bajo diversas expresiones contractuales se pueden efectuar. Solo que el artículo 24 *“...en desarrollo del concepto de protección al trabajador consagra la presunción enunciada, de forma que este se halla liberado de acreditar la subordinación...cosa que no impide que aparezca la prueba de que el vínculo en cuestión en realidad fue independiente...”* (Ver Sentencias de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Radicado 14096 del 27 de junio de 2000 y SL 663-2018).

Por manera que, siguiendo las reglas generales de la carga de la prueba (art 164 y 167 del CGP), corresponde al trabajador, para favorecerse de la presunción aludida, acreditar con suficiencia que prestó un servicio personal para quien se reputa empleador. Y a este último, si aspira a desvirtuarla, que la labor fue autónoma e independiente.

Con base en esas precisiones, se tiene que, en el presente caso, ante la inasistencia de los demandados a la etapa de conciliación, se presumieron como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda (fls 364 a 367), lo que, con las pruebas documentales y testimoniales practicadas, se revela que el actor prestó sus servicios como maestros de obra entre el 1 de octubre de 2014 hasta el 10 de marzo de 2015, sin que mediara justa causa en la terminación de la relación contractual. Conclusiones estas a las que se arriba con fundamento en los siguientes aspectos.

Con relación a la prestación personal del servicio, partiendo de la presunción declarada, se tiene que la demandada no desvirtuó que el actor, aparte de ejercer su labor como contratista, prestó sus servicios como maestro de obra, lo cual, por el contrario, fue respaldado por los decires de los testigos Juan Adán Ortiz Salazar (min 1:11:00 a 1:30:00), Oscar Hernán Marín Cardona (min 1:31:00 a 1:39:00) y Albeiro Maldonado

(min 1:39:00 en adelante) quienes coincidieron en mencionar que el actor prestó sus servicios como maestro de obra al interior de la construcción adelantada en la Institución Educativa Presbítero Eduardo Zuluaga del Municipio de Yolombó en la Vereda el Rubí, ejecutando las labores relacionadas con topografía, trazos, medidas, dirigir a los trabajadores, entre otras.

En este punto es menester prestar atención al testimonio de Juan Adán Ortiz Salazar, director de la obra mencionada, quien, para lo pertinente, señaló que el actor fue contratado como maestro de obra pasado 15 días de haberse iniciado la ejecución del contrato “primera etapa para la construcción y ejecución de obras para la institución educativa presbítero Eduardo Zuluaga del Municipio de Yolombó Vereda el Rubí, en el marco del contrato interadministrativo N° 2012SS150114”, lo que conlleva a llegar a la misma conclusión de la a quo, de considerar que la prestación personal del servicio del actor como maestro de obra inicio el 1 de octubre de 2014.

Frente a la remuneración, se tiene que de la documental aportada por la misma demandada, la cual no fue tachada, de la que a fls. 138 a 153 se evidencian varios comprobantes de egresos que relacionan, entre varios conceptos, pago nomina maestro, la cual, al no estar discriminada, según la presunción declarada, se concluye que es \$1´400.000, toda vez que todos los que relacionan ese concepto, superan por mucho ese valor.

Ahora, con relación a la subordinación como último elemento integrante del contrato de trabajo, la Sala considera que los documentos aportados por la demandada no tienen el suficiente peso para desvirtuar la presunción del artículo 24 del CST, sumado a que no hubo a su favor testimonios o interrogatorios de parte que pudieran respaldar que la labor de Maestro de Obra ejecutada por el actor, fue autónoma e independiente.

Así las cosas, al evidenciar la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación, no queda más camino que confirmar la decisión adoptada por la juez de primera instancia, de declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde el 1 de septiembre de 2014, labor esta que se ejecutó de manera concomitante

con la de contratista independiente hasta el 10 de marzo de 2015, fecha ésta relacionada por ambas partes como el extremo final de la relación, misma que no obra prueba al interior del proceso y de las pruebas allegadas, que se haya terminada con jura causa, por lo que el demandante tiene derecho a que se le reconozca y paguen las vacaciones y demás prestaciones establecidas para los contratos de trabajo en general, así como la indemnización por despido injusto prevista en el artículo 64 del CST y los salarios insolutos entre el 15 de febrero y 10 de marzo de 2015, toda vez que la demandada no demostró su pago al interior del proceso.

**LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS**

Salario \$1'400.000  
Días laborados: 190

- **Cesantías e intereses sobre la cesantía**

Se modificará la condena impuesta en los siguientes términos:

Año	Cesantías	Intereses
2014	\$466.666	\$18.667
2015	\$ 272.222	\$6.352
Total	<b>\$738.000</b>	<b>\$25.019</b>

- **Prima de servicios.**

Se modificará la condena impuesta en los siguientes términos:

Año	Prima
2014	\$466.666
2015	\$272.222
Total	<b>\$738.000</b>

- **Vacaciones:**

Se modificará la condena impuesta en los siguientes términos:

Año	Vacaciones
2014	\$ 233.333
2015	\$136.111
Total	<b>\$369.444</b>

- **Salarios insolutos**

Se modificará la condena impuesta en los siguientes términos:

Mes	Días	Valor
Febrero	16 al 28 febrero 2015	\$750.000
Marzo	1 al 10 de marzo de 2015	\$466.666
Total		\$1'216.666

- **Indemnización art. 64 CST.**

Como es sabido, cuando se pretende por vía judicial la indemnización del art 64 del CST, le corresponde al trabajador demostrar el despido, y al empleador para desligarse de esa obligación, la justa causa comprobada que lo llevó a tomar esa decisión.

Pues bien, en el presente caso, al no haberse desvirtuado la presunción del despido y como la demandada no logró demostrar justa causa en la terminación del vínculo contractual, habrá de confirmarse la decisión adoptada por la juez de primera instancia en ese sentido, en consecuencia, por este concepto adeuda la parte demandada al acor la suma de \$1'400.000.

- **Indemnización moratoria del art. 65 del C.S.T. y la prevista en el art 99 de la Ley 50 de 1990.**

Para la Sala, es claro que la imposición de dichas sanciones debe obedecer a las condiciones de cada caso, es decir, debe evidenciarse una actuación de la que se infiera, la mala fe del empleador; esto es, la intención de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones, ya que la demostración simple del no pago de salarios y prestaciones a la terminación del contrato de trabajo no siempre acarrea de forma automática su imposición, pues es necesario analizar las razones o circunstancias por las cuales el empleador, a la terminación del vínculo laboral, no satisfizo todas las acreencias laborales.

Con base en esa intelección, en el presente caso no se accederá a estas pretensiones, en la medida que no se observa de la pasiva un actuar desprovisto de probidad o buena fe, al momento de terminar el contrato. Obsérvese como la empresa desde el inicio de la relación creyó haber celebrado un acuerdo de carácter comercial, que en la realidad por las actuaciones efectuadas por sus voceros y representantes frente a la actora, lo convirtió en laboral, circunstancia de la que no puede colegirse una intención fehaciente por parte del empleador de desconocer réditos laborales, cuando en verdad fueron las circunstancias propias en que se ejecutó la labor, lo que llevó a la configuración del contrato aquí declarado.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos objeto de apelación.

Finalmente, costas en ambas instancias a cargo de la parte pasiva, se fijan como agencias en derecho de la alzada en 2 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, decide: **CONFIRMAR PARCIALMENTE** la sentencia de primera instancia apelada, la **MODIFICA** en las condenas impuestas para que en su lugar sean reconocidas así: por cesantías **\$738.000**, intereses sobre la cesantía **\$25.019**, por prima de servicios **\$738.000**, por vacaciones **\$369.444**.

Costas en ambas instancias a cargo de los demandados, de las que se tasan las agencias en derecho en esta instancia en la suma de 2 SMLMV.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

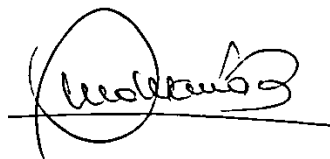
Los Magistrados,

  
**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**





**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 14 publicados por medios digitales el 29 de enero de 2021